

RUMANIA

ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL

La escena política y las primeras planas de todos los medios de comunicación han estado dominadas, en el mes de agosto, por las polémicas causadas alrededor de las manifestaciones antigubernamentales llevadas a cabo por los griegos en el exterior. Y sobre todo por las consecuencias de estas manifestaciones.

Más de 450 personas (entre ellas 35 policías) han necesitado atención médica tras los actos violentos que se produjeron el 10 de agosto por la noche en la manifestación organizada en la Plaza de la Victoria. Unas 100.000 personas se habían reunido delante de la sede del Gobierno de Bucarest para participar en la manifestación de los rumanos que viven en el exterior, a los que se han unido rumanos de la Capital. El mismo día, en varias ciudades del país, decenas de miles de personas, solidarias con la manifestación de los rumanos que viven en el exterior han salido a la calle gritando consignas antigubernamentales.

Los manifestantes, descontentos con el actual Ejecutivo, han pedido la dimisión del Gobierno y la organización de elecciones anticipadas. Se han registrado enfrentamientos violentos entre los manifestantes y los gendarmes, y las fuerzas del orden han usado gases lacrimógenos y cañones de agua para apartar a los manifestantes. La policía ha anunciado la presencia de unos grupos de provocadores delante de la sede del Gobierno. Los gendarmes han intervenido después de que algunos representantes de las fuerzas del orden fueran atacados. El presidente Klaus Iohannis ha condenado firmemente la intervención brutal de la Gendarmería contra los manifestantes en la Plaza de la Victoria y ha destacado que la ministra del Interior, Carmen Dan, debe explicar urgentemente la forma en la que ha manejado los eventos. Los líderes de la oposición han condenado también la reacción de la Gendarmería y han pedido la dimisión de la ministra del Interior. Anteriormente, los líderes políticos de la mayoría habían declarado que la oposición debería asumir la manifestación, considerándola el verdadero organizador de las protestas.

Dos semanas después de producirse los acontecimientos, la primera ministra, Viorica Dancila, ha acusado a la oposición de tratar de asumir el poder por medios no democráticos, tras fracasar en las elecciones. Dancila ha declarado que hubo un asalto contra algunas instituciones del estado, una de ellas la Gendarmería y ha solicitado a los ministros y a los jefes de las instituciones subordinadas que eviten esta espiral del conflicto. En réplica, el líder del principal partido de oposición, Ludovic Orban, ha reprochado a la primera ministra el hecho de no asumirse la responsabilidad por las acciones brutales de los gendarmes y por los

daños causados a los protestatarios.

«No existe ninguna espiral del conflicto alimentada por la oposición o por el presidente Iohannis, pero existe una espiral de las mentiras y de los abusos cometidos por el líder socialdemócrata, Liviu Dragnea, por la primera ministra Dancila y por la titular del Interior Carmen Dan, así como por todos aquellos que ordenaron las represalias de las protestas y el maltrato de los participantes en el mitin anti gobierno», ha afirmado, en un comunicado, Ludovic Orban.

Según Bertrand Cavallier, experto militar francés en el aseguramiento y la restauración del orden público, y buen conocedor del sistema de orden público de Rumanía, los acontecimientos del 10 de agosto representan un motivo de reflexión para los factores de decisión de Rumanía, a fin de identificar una modalidad para perfeccionar las estructuras especializadas, desde la organización, los derechos y formación del personal, hasta las claves de control y los medios utilizados.

Las violencias registradas durante el mitin del 10 de agosto han evidenciado más que nunca, las grietas del ámbito político. El presidente de derecha, Klaus Iohannis, ha solicitado al PSD, en el poder, que tome en consideración las solicitudes de los rumanos que están protestando desde hace de un año y medio. Iohannis ha acusado a la dirección del partido de actuar de manera represiva según el modelo de los regímenes autoritarios, tras comprometer el acto de gobierno. Además, el presidente ha dicho que la intervención de la Gendarmería fue desproporcionada en comparación con las manifestaciones de los ciudadanos reunidos en la Plaza de la Victoria, y ha condenado al mismo tiempo las acciones violentas de aquellos que instigaron y asaltaron a los gendarmes en el intento de desviar una protesta pacífica.

A su vez, el PSD ha transmitido un comunicado en que califica al presidente Iohannis de factor nocivo que se empeña en mantener vivos los conflictos y que divide, de manera premeditada, a la sociedad rumana, violando gravemente las atribuciones constitucionales. Los socialdemócratas consideran también que a través de su solicitud insistente de que los fiscales investiguen a los gendarmes por sus acciones, el presidente los humilla e intimida debilitando de manera antirreglamentaria la determinación de unas instituciones vitales en las intervenciones que persiguen defender el orden público. No en último lugar, el PSD califica de antinacional cualquier tentativa que persigue socavar el ejercicio de gobierno por la actual mayoría parlamentaria.

Otro de los temas críticos del panorama rumano es el relacionado con la reforma de la justicia. A primeros de julio, con el apoyo de varios representantes de las minorías nacionales, la coalición de Gobierno

formada por el PSD y la Alianza Liberal-Demócratas, había conseguido la aprobación, a un ritmo acelerado, las controvertidas modificaciones del Código Penal. La ley más criticada se refiere a la redefinición del delito de prevaricación que en la nueva forma se castigará sólo si el perjuicio rebasa el salario mínimo bruto por economía y el delito no beneficia al autor, a sus parientes o afines hasta el segundo grado. Fue eliminado el artículo con respecto a la negligencia en el servicio, disminuyeron las penas para algunos delitos así como los plazos de prescripción.

La oposición de derecha que recurrió al Tribunal Constitucional de Rumanía, considera que las modificaciones favorecen a los criminales y que se hicieron con dedicación, ya que entre las personas que se podrían beneficiar de la protección de la ley se encuentra también el líder socialdemócrata, Liviu Dragnea. Este recibió ya una condena no definitiva de pena de cárcel con ingreso en prisión por instigación al delito de prevaricación.

Por su parte, la mayoría parlamentaria formada por el PSD y ALDE ha declarado que los cambios armonizan la legislación con las decisiones del Tribunal Constitucional y las directivas de la UE.

El presidente Klaus Iohannis, ha anunciado que hará uso de todos los instrumentos constitucionales para impugnar las modificaciones del Código Penal. En opinión del presidente lo que ocurre en el presente equivale a una dictadura de la mayoría, que afecta profundamente a la democracia. La Fiscalía General ha llamado la atención acerca de que las modificaciones operadas conllevarán la clasificación de algunos expedientes en fase de investigación y el cierre de procesos en curso y ha acusado al Parlamento de infringir las disposiciones de la Convención de la ONU contra la corrupción.

La Comisión Europea ha anunciado que sigue atentamente las reformas relativas al sistema judicial de Rumanía y los cambios operados en el Código Penal y que si hace falta no vacilará en tomar medidas. El Consejo de Europa ha solicitado a Bucarest que espere la opinión de la Comisión de Venecia con respecto a la reforma del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal, porque los cambios corren el riesgo de contravenir las obligaciones internacionales de Rumanía. En Bucarest y otras grandes ciudades rumanas, miles de personas salieron a la calle en señal de protesta.

A finales de julio, el Gobierno (el tercero en un año y medio de la coalición PSD-ALDE) ha hecho su balance de seis meses de gestión. Mayores ingresos presupuestarios y una mejor absorción de fondos europeos son sólo algunas de las realizaciones del actual Ejecutivo presentadas por la primera ministra Viorica Dancila. La primera ministra ha mencionado entre

otras cosas las medidas que persiguen estimular el mercado laboral y los programas de respaldo destinados a los granjeros. Viorica Dancila ha precisado que en los seis primeros meses del año, en el presupuesto del Estado entraron 15.000 millones de lei más, esto es 3200 millones de euros frente al mismo período del año pasado. La duplicación de los salarios de los cuadros médicos y el aumento en un 25% de los salarios de los profesores fueron incluidos en el capítulo relativo a las medidas sociales. Han sido aprobados 13 grandes proyectos de inversiones estratégicas de los cuales cuatro pertenecen a la infraestructura de transportes, y se finalizaron 192 kilómetros de líneas eléctricas que facilitan la interconexión con los Estados vecinos de Hungría y Serbia. El presidente del PNL, de la oposición parlamentaria de derecha, Ludovic Orban, ha criticado en términos duros la actividad del actual Ejecutivo acusándole de detener el crecimiento económico registrado anteriormente y de disminuir el poder adquisitivo de los rumanos.

A primeros de agosto la primera ministra rumana, Viorica Dancila, ha ofrecido detalles sobre la primera revisión presupuestaria positiva de este año. En opinión de Dancila, en los primeros siete meses, los ingresos del presupuesto general consolidado excedieron en 6 millones de lei, esto es 1300 millones de euros, las estimaciones iniciales de las autoridades. La primera ministra ha dicho que la rectificación presupuestaria persigue asegurar los fondos necesarios al pago de pensiones y salarios hasta el final del año, y el dinero para respaldar los proyectos de inversiones y el ámbito de negocios. Fondos extra recibirán las autoridades locales, el sector de la sanidad, agricultura y los transportes, así como el Ministerio del Interior y la Agencia Nacional para la Administración Fiscal. En cambio, se reducirá la financiación del Servicio Rumano de Inteligencia, del Servicio de Inteligencia Exterior, de la Administración Presidencial, del Ministerio de Medio Ambiente, del Ministerio de Exteriores y del Ministerio de Energía. Viorica Dancila ha explicado que han disminuido los presupuestos de algunas instituciones que no han logrado invertir de manera correspondiente los fondos asignados. La ordenanza de rectificación será adoptada en la segunda mitad del mes de agosto. Al mismo tiempo, la primera ministra ha asegurado que Rumanía cumplirá el objetivo de déficit presupuestario del 3% del PIB.

El BNR ha modificado el pronóstico sobre la inflación para este fin de año, del 3,6 al 3,5%. Las estimaciones también prevén una bajada para el 2019 del 3 al 2,7%, ha anunciado el gobernador Mugur Isărescu. Además, ha explicado que la tasa de inflación puede reintegrarse al pronóstico establecido por el Banco Central, si no aparecen nuevos choques cuyos efectos no dependen de la política monetaria. Por otro lado, el aumento económico de Rumanía, estimado para este año por el Banco Nacional, ha alcanzado casi un 4%, frente a un 7% en 2017. Mugur Isărescu cree que para la economía es mejor registrar un desarrollo constante a largo

plazo en función de su potencial. Cuando tenemos un aumento económico importante, hay más inversiones, aumenta la productividad y la mano de obra es más eficiente, ha dicho el jefe del BNR.
